



La guerrilla argentina. El final de una épica impura

Por Sergio Bufano

Fueron numerosas las deformaciones durante el proceso de militarización de los grupos armados. La profesionalización del militante y cierta identificación con el enemigo al que se pretendía combatir, contribuyeron para que la experiencia culminara con su derrota.

Durante los años de la dictadura militar argentina, y en los primeros de la democracia recuperada en 1983, los sobrevivientes formularon preguntas que en ese entonces era difícil responder. En el exilio, en la cárcel, donde fuera, hubo infinitos interrogantes recurrentemente reiterados: ¿cómo se narrará lo sucedido? ¿en qué clave? ¿cuál será el género literario adecuado? ¿en qué fecha se iniciará el relato? En definitiva esas cuestiones podían sintetizarse en sólo una: ¿cómo se contará una historia que terminó con el fracaso de un proyecto revolucionario y su secuela de muertes, campos de concentración y desolación cultural?

El tiempo y la voluntad de narrar lo sucedido fueron resolviendo el problema: novelistas, ensayistas, directores de cine, poetas, estudiantes y académicos avanzaron sobre el relato y, con mayor o menor fortuna, siguen reconstruyendo la época más trágica de la historia argentina. Trabajos de todas las disciplinas han penetrado en el mundo de la violencia política buceando en aguas oscuras, muchas veces a tientas y muchas otras con temor.

El proceso de investigación y narración puede dividirse en dos etapas: la primera estuvo dirigida a demostrar que en Argentina se habían cometido crímenes de lesa humanidad y que era necesario castigar a los culpables. Salvo algunas excepciones todos los análisis producidos luego de la recuperación de la democracia evitaron la crítica a los grupos armados y apuntaron a denunciar a las fuerzas represivas, sus métodos, cárceles, torturas, sistema de esclavitud aplicado a los prisioneros, robo de niños, etc. El sistema judicial necesitaba insumos para procesar a los culpables y la sociedad debía conocer los detalles de la matanza.

Obtenidos parcialmente algunos de los objetivos de la primera etapa, comenzó a plantearse la necesidad de revisar la actuación de los grupos que desde la izquierda habían utilizado la violencia política como recurso para intentar el acceso al poder. Tarea ésta también compleja por

la reticencia de muchos integrantes de esos grupos para revisar su actuación en esos años tumultuosos. La excusa frecuentemente utilizada -darle “argumentos al enemigo”- ocultaba en verdad la escasa disposición a mirar críticamente el pasado de esa izquierda. Hasta ese momento los sobrevivientes –ex exiliados internos y externos, perseguidos políticos- permanecían en la categoría de víctimas, lo que facilitaba la falta de conciencia crítica y los ubicaba en un papel pasivo, ajeno a cualquier protagonismo en la historia de la violencia política. Podría afirmarse que víctimas son los desaparecidos, los que fueron torturados y muertos en los campos. Carecen del derecho de réplica porque se les arrebató la vida. Su voz ha sido congelada por la muerte. También son víctimas los hijos de los desaparecidos, los que fueron secuestrados por cuestiones ajenas a ellos, historias en las que no eligieron participar, y muchos de los cuales todavía viven, sin saberlo, con una identidad falsa.

Es probable que la confusión entre víctima y protagonista se haya iniciado durante el Juicio a las Juntas, en el que fueron juzgados y condenados, en diciembre de 1985, los principales responsables de la dictadura militar. Durante su transcurso los fiscales presentaron a numerosos testigos que habían sido secuestrados y torturados. Todos ellos eludieron la pregunta de los defensores de los militares acerca de su pertenencia a alguna organización armada; sus respuestas los ubicaba, invariablemente, en organizaciones periféricas, de “superficie” y ajenas a la actividad armada. No hubo ningún caso en el que el testigo aceptara su condición de ex guerrillero. Era notorio observar cómo antiguos combatientes negaban su pasado y se ubicaban en el exclusivo rol de víctimas. Sin duda lo eran. Habían sido secuestrados por militares, llevados a centros clandestinos de detención, torturados durante meses, sometidos en muchos casos a la esclavitud, habían presenciado el horror y la muerte de sus compañeros. Nadie podía dudar que habían sido víctimas de una represión violatoria de todos los derechos humanos; pero antes de eso habían sido guerrilleros que optaron por las armas como método para acceder al poder. Más allá de procedimientos jurídicos legítimos y necesarios para la estrategia de la fiscalía, la figura de víctima opacó a la del combatiente y éste quedó en el exclusivo y pasivo rol de sacrificado.

Un factor que influyó en esta forma de plantear la cuestión es el breve lapso que había pasado entre la retirada de los militares y el inicio del Juicio a las Juntas. Los militares todavía conservaban una cuota de poder importante y el temor que despertaban en la frágil democracia de ese entonces era suficiente justificativo como para no “darse a conocer”. En esos tempranos años de democracia había cosas que todavía no era conveniente hacer ni decir. Lo que aquí se quiere señalar es que ese desdibujamiento de roles, junto con la falta de disposición a revisar su propia conducta, contribuyó a que los guerrilleros de los años setenta se asumieran únicamente como objeto pasivo de una represión despiadada.

El paso de los años, la consolidación de la democracia y la pérdida de poder de los antiguos represores entreabrió las puertas para una mirada más compleja y crítica sobre el papel jugado por las organizaciones armadas. Mirada que todavía se resiste a abarcar profundamente la

propia historia; la tentación de monopolizar la memoria —y también el olvido- no ha desaparecido completamente. El impulso a recrear el pasado mediante relatos fantásticos protagonizados por prototipos inmaculados aún persiste en viejos militantes guerrilleros que no desean abandonar el ropaje de partisanos libertarios. Desnudar ese pasado no implica deslealtad alguna; que el comienzo de la lucha estuvo signado por el ansia de libertad y de igualdad nadie puede negarlo. Que el uso de las armas y el posterior desprecio por la democracia empujó al desatino, tampoco.

“... la memoria y el olvido no representan terrenos neutrales, sino verdaderos campos de batalla en los que se decide, se modela y se legitima la identidad, especialmente la colectiva. A través de una serie ininterrumpida de luchas, los contendientes se apropian de su cuota de herencia simbólica del pasado, excluyen o ponen de manifiesto algunos rasgos suyos en detrimento de otros, componiendo un claroscuro relativamente adecuado a las más sentidas exigencias del momento”.

Fueron numerosas las deformaciones que se produjeron durante ese proceso de militarización. Con el propósito de centralizar la crítica aquí abordaremos sólo dos de ellas, poco analizadas hasta ahora, y que contribuyeron para que la experiencia guerrillera terminara con la derrota política y militar. No son las más importantes ni las decisivas, pero sirven de modelo para dar cuenta del camino sin retorno emprendido por los grupos armados: a) la llamada profesionalización del militante, y b) la identificación con el enemigo.

NACIDOS EN LOS SESENTA

La década que se inició en el año 1960 ofrece una multiplicidad de interpretaciones, sea cual fuere la perspectiva elegida -política, social, económica o cultural- y en todas sus variantes, ya sea en artes plásticas, cine, teatro, danza y literatura. Puede ser vista como el inicio de un vendaval de nuevas ideas que finalmente serán aplastadas por un capitalismo salvaje triunfante o, por el contrario, como los estertores finales de la primera mitad del siglo XX, rico y prodigioso, que se negaba a morir.

En cualquiera de las dos interpretaciones el final es el mismo: una caída libre hacia la pérdida de grandes relatos, la desorientación en propuestas hacia el futuro, la degradación y en muchos casos el conformismo o pereza en el campo de las ideas.

Elijamos una fecha arbitraria: quienes en enero de 1960 se iniciaron en la vida política y cultural encontraron un vastísimo campo que ofrecía innumerables alternativas. Desde Europa y los Estados Unidos llegaban las voces de prestigiosos intelectuales que con su obra proponían nuevas formas estéticas y búsquedas que estimulaban un rico debate. Describían en sus ensayos o novelas la decadencia de un capitalismo que se suponía en extinción. Latinoamérica participaba activamente de ese ímpetu a través de Jorge Onetti, Pablo Neruda, Mario Benedetti, Miguel Angel Asturias, luego García Márquez y Vargas Llosa, integrantes de una extensa lista de artistas e intelectuales que más allá de las diferencias que naturalmente aparecían a la luz, se aventuraban en la búsqueda de nuevos compromisos sociales que empujaban a indagar en formas estéticas también novedosas o si se quiere revolucionarias.

Existía una certeza compartida por la mayoría de los grandes pensadores: el mundo estaba en las vísperas de un cambio que transformaría las relaciones de producción y en consecuencia las relaciones humanas. Si hasta la primera mitad del siglo XX el capitalismo había resistido el surgimiento y los embates de un socialismo nacido en Octubre de 1917 en Rusia, todo indicaba que los cimientos del sistema comenzaban a ceder y que llegaría el día en que se derrumbaría para dar paso a otra etapa de la historia. La lucha de los pueblos colonizados era un ejemplo del retroceso de las naciones imperialistas: se luchaba en el Congo belga, en Indochina francesa y en Argelia. Y en todos esos países se obtenían importantes victorias. Estaba claro que la caída final no se produciría fácilmente y que alcanzar la meta implicaría importantes sacrificios, luchas decisivas y sobre todo una gran cuota de voluntad. Ni la Revolución Francesa, ni la Revolución Rusa ni la dirigida por Mao Tse Tung habrían triunfado sin la voluntad de entregar la vida por parte de miles de revolucionarios. Los cambios de esa magnitud cobraban su cuota de sangre y había que estar dispuesto a ofrecerla sin mezquindad. Las derrotas producidas en Alemania en 1923 y España en 1936 sólo habían sido tropiezos que no cuestionaban el objetivo final. La certeza revolucionaria clausuraba cualquier incertidumbre o flaqueza. En el año 1960 no se quería escuchar a las primeras voces que, habiendo participado del proyecto, alertaban sobre los peligros que la revolución traía en su seno: ni Arthur Koestler, ni Andre Malraux, ni André Gide, ni Albert Camus, ni Octavio Paz ni tantos otros que dieron un grito de alerta, fueron atendidos. Si había algo intolerable y por lo tanto imperdonable, era la vacilación.

Para confirmar que la historia futura ya estaba escrita, un año antes se había producido una revolución que marcaba el inicio del recorrido americano: Cuba fue el más grande suceso que ratificó el rumbo elegido. El continente latinoamericano pareció estallar en revueltas populares y alzamientos de grupos armados: un recorrido desordenado durante la década del sesenta muestra en México a Lucio Cabañas que se interna en el monte; en Guatemala lo hace Yon Sosa; en Nicaragua comienzan las primeras escaramuzas con grupos insurgentes; en Colombia Fabio Vázquez Castaño, al frente del Ejército de Liberación Nacional y Manuel Marulanda Vélez –Tirofijo- dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia; en Ecuador grupos armados de orientación maoísta ocupan tierras junto con campesinos; en Perú el ex miembro de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), Luis de la Puente Uceda inicia su guerrilla rural; en Bolivia es el Ejército de Liberación Nacional (ELN) creado por Ernesto Guevara;

en Chile comienza a actuar el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR); en Brasil el ex comunista Marighela crea su grupo armado y el oficial del Ejército Lamarca levanta las banderas del socialismo para iniciar su guerrilla. Paraguay tenía ya un largo y sangriento enfrentamiento armado entre la dictadura de Stroessner y el Partido Comunista. Finalmente, en el apacible y democrático Uruguay surge un poderoso Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros, primera versión de la guerrilla urbana.

A esos emprendimientos armados se sumaron revueltas populares y estudiantiles que culminaron en sangrientas represiones (Tlatelolco en México; Guayaquil, en Ecuador; Córdoba, en Argentina). En Santo Domingo fue necesaria la intervención de Estados Unidos para reprimir un alzamiento armado. Todo indicaba que en el continente, luego del éxito cubano, se producirían nuevas revoluciones de orientación socialista en la mayoría de los casos, o populistas en otros.

Pero esa ola revolucionaria no era patrimonio único de los latinoamericanos. En Estados Unidos, el centro del mayor poder imperial, surgió el Black Power, un movimiento negro que tomó las armas para crear una guerrilla urbana. Aunque un poco más tarde, tampoco Europa escapó a esa tendencia: en Alemania el grupo Baader Meinhof con su Fracción del Ejército Rojo y en Italia las Brigadas Rojas comenzaron su vida política mediante cruentas operaciones armadas. También el Mayo francés fue visto como el despertar de la ola revolucionaria en ese continente.

¿Fin de época o inicio de una nueva era? Es difícil discernir el carácter de la década sesentista por su complejidad y diversidad. Pero nos inclinamos a creer que esos años fueron una suerte de último empuje inercial, de la culminación –aunque no por ello menos enérgica– de los movimientos sociales, revolucionarios y culturales nacidos en octubre de 1917 en Rusia. Los últimos coletazos de una propuesta totalizante que se desmoronaba, y que en su caída se aferraba a la utopía que, en la cabeza de los revolucionarios de entonces, no tardaría en transformarse en Revolución si se volcaba en ese propósito toda la voluntad.

Argentina no fue ajena a esa ola revolucionaria que recorría el continente y buena parte del mundo. Pequeños grupos marxistas desvinculados del Partido Socialista y del Partido Comunista, y grupos cristianos progresistas, comenzaron a plantear la necesidad de utilizar métodos violentos para acelerar el proceso que parecía inevitable. En el caso específico argentino, una larga sucesión de golpes de Estado protagonizados por militares contra gobiernos civiles había frustrado los intentos democráticos, y contribuido a influir negativamente en la sociedad. Cierre de locales partidarios, prohibición de toda actividad política, proscripción del peronismo, intervenciones a los sindicatos y represión policial, caracterizaron más de treinta años de historia y fomentaron una cultura intolerante, antidemocrática y a la vez soberbia porque toda la

invocación estaba referida a fundar “la Argentina que nos merecemos”, reflejo de aquella que en los primeros años del siglo XX figuraba entre los siete primeros países del mundo.

Si una derecha recalcitrante y autoritaria podía desconocer el resultado de las urnas y tomar el poder mediante el uso de las armas para imponer su propia voluntad, ¿por qué los civiles que propugnábamos la igualdad, la erradicación de la pobreza, la educación, en fin, un mundo feliz, no íbamos a intentar por medio de las armas lo que a toda vista era imposible obtener por medio de las urnas? Si las Fuerzas Armadas, una institución del Estado, financiadas por la sociedad para defender las fronteras de cualquier agresión externa, utilizaban las armas para torcer la voluntad del pueblo expresada en las elecciones, ¿por qué se podía cuestionar el derecho de alzarnos en armas contra ellos, los usurpadores si, además, el fin que nos guiaba era supremo y libertario?

El episodio que contribuyó a justificar la toma de las armas fue el golpe de Estado del general Juan Carlos Onganía, en 1966. Si faltaba algún incentivo para que grupos marxistas por un lado, y cristianos de izquierda por el otro, se internaran en la violencia política, Onganía lo proporcionó al derribar un gobierno democrático y anunciar que permanecería en el poder en los siguientes veinte años. El clima de opresión política y represión cultural fue el detonante que decidió a los que todavía dudaban en tomar las armas. Profesionales, estudiantes, sindicalistas, trabajadores, se lanzaron a protagonizar la historia tal como lo habían hecho revolucionarios de otras naciones. Había llegado la hora crucial de transformar un mundo de injusticia en un mundo de igualdad. Con una tenacidad arrolladora, antiguos militantes y jóvenes recién incorporados a la vida política, se embarcaron en un proyecto que aspiraba a transformar la civilización capitalista y occidental. Con cierto éxito en sus inicios, la intención emancipadora se fue debilitando a sí misma: el uso cotidiano de las armas y el descubrimiento de que las acciones militares tenían mucha más influencia en la vida política nacional que una mesa de negociaciones, derivó en autoritarismo, en negación de la política como intermediación social, en desprecio del diálogo como fórmula de acuerdo.

Retomemos, entonces, los dos ejes sobre los que centraremos esta reflexión.

PROFESIONALIZACIÓN DEL MILITANTE

Es muy difícil estimar el daño que ocasionó la llamada profesionalización del militante; ante la imposibilidad de obtener datos cuantificables toda valoración del fenómeno será necesaria-

mente parcial y subjetiva. Pero vale la pena intentar acercarse a esa práctica para descubrir aunque sea una pequeña porción del problema que produjo ese concepto nacido con Lenin y la Revolución Soviética

Profesionalizado fue, para la guerrilla argentina, aquel militante que por razones de persecución política o por decisión de los dirigentes, abandonaba su trabajo, sus estudios, sus hábitos de vida, también sus rutinas familiares y sociales, para dedicarse exclusivamente a las tareas revolucionarias. Trabajador de tiempo completo, el militante profesionalizado recibía mensualmente una renta módica, suficiente para mantenerse modestamente.

En sus inicios, durante el proceso de formación de grupos armados, se evitó generalizar esa condición entre los militantes por dos razones que fueron fundamentadas acertadamente y que revelan que en ese entonces existía un criterio aún no contaminado por el arrebató que posteriormente dominó a la guerrilla. La primera de ellas era contrarrestar la tendencia al aislamiento que imponía la actividad armada; el nexo entre la sociedad y la guerrilla debía ser, precisamente, el militante que actuaba en la organización y, simultáneamente, en los llamados frentes de masas, fueran estos la Universidad, la comisión interna de una fábrica, el barrio o sencillamente la oficina. Romper ese nexo implicaba acelerar el proceso de aislamiento que necesariamente intentaría provocar el enemigo, más interesado que ninguno en cortar los vínculos entre guerrilleros y sociedad. Si lograba ese propósito habría conseguido derrotar a las organizaciones, ya que sería imposible crecer y desarrollarse políticamente sin un estrecho contacto con el pueblo. Era pues una razón política basada en la necesidad de evitar un sesgo “foquista”, la que pesaba para impedir una extendida profesionalización de los militantes.

La segunda se refería a problemas de tipo organizativo. Al ser todavía pequeñas y no contar con los suficientes recursos, las organizaciones debían evitar el compromiso de mantener a muchos profesionalizados ya que de lo contrario corrían el riesgo de crear un inmenso aparato que exigiría más fondos de los que tenía capacidad de generar.

La primera argumentación demuestra que durante su nacimiento la guerrilla –más allá de sus siglas y propuestas- tenía intenciones de permanecer vinculada con aquellos sectores a los que se proponía representar; no perder puntos de contacto con la sociedad es una posición que demuestra que en sus orígenes existía clara conciencia de que el “foquismo”, aislado socialmente, estaba condenado a fracasar.

Barrios obreros, comisiones internas en fábricas, villas miserias, empleos estatales o privados fueron poblándose de militantes que actuaban fuera de sus horarios de trabajo y participaban

activamente en los conflictos gremiales. La guerrilla se instalaba en lo que sería su base social al tiempo que realizaba operaciones armadas y daba a conocer sus siglas y manifiestos.

Pero este lazo con la sociedad se fue debilitando, haciéndose cada vez más laxo, a medida que se intensificaba la espiral de violencia. Las exigencias de clandestinidad de muchos militantes fueron imponiéndose sobre las condiciones de la infraestructura. Aquellos que por distintas razones eran detectados por los organismos represivos del Estado se vieron obligados a abandonar sus lugares habituales -incluyendo trabajo, universidad, vivienda, familia-, para ingresar a la categoría de militante rentado. El objetivo de la represión estatal de cercenar los vínculos entre militancia y bases sociales, comenzó a cumplirse lentamente.

Sin embargo, no fue éste -al fin y al cabo un elemento externo al grupo-, el principal motivo. Otro criterio político fue ganando terreno y adueñándose de los cuadros directivos y se impuso finalmente en la mayoría de las organizaciones guerrilleras. El discurso podría resumirse así: las tareas revolucionarias exigen la formación de un partido de cuadros, de revolucionarios profesionales, de hombres y mujeres que se dediquen ciento por ciento a las labores de la revolución. Para ello se seleccionará a los más capaces, los más decididos, y se los integrará a la organización con dedicación completa.

Jóvenes estudiantes, algunos de ellos recién egresados de la Universidad, profesionales de disciplinas diversas, desde ingenieros, médicos, abogados, psicoanalistas, hasta pintores y escritores, fueron los primeros en abandonar sus vidas privadas para ingresar a la categoría de profesionales.

Les siguieron los que por razones personales tenían mayores aptitudes para tareas militares: muchachos a quienes les gustaban las armas, eran más valientes, demostraban capacidad de mando atraídos por el hálito de la aventura revolucionaria.

A medida que se incrementó el accionar militar el proceso de profesionalización llegó a ser tan indiscriminado que se conformó una verdadera legión de jóvenes que dependía económicamente de sus respectivas organizaciones. Esto condujo necesariamente a una trampa de difícil solución: para mantener a los profesionalizados había que realizar operativos que proveyeran de fondos; pero para que esos operativos fuesen económicamente considerables hacía falta un buen número de profesionalizados que estuviera en condiciones de realizar las operaciones militares. Asaltos bancarios, secuestros de empresarios, asaltos a camiones blindados y toda esa gama de acciones redituables económicamente exigen un considerable esfuerzo de vigilancia, control de movimientos, horarios de personal, planes de fuga, en fin, exigen mucho tiempo de planificación y dedicación exclusiva que sólo puede llevarse a cabo gracias a los

profesionalizados. Los militantes con obligaciones laborales no pueden faltar a su oficina o fábrica para vigilar los objetivos elegidos; son los rentados, entonces, quienes tendrán a su cargo esa tarea pues disponen de todo su tiempo para ello.

Esto creó situaciones de privilegio hacia el militante de tiempo completo. Y también de dependencia. Por una parte, el profesionalizado era el que podía concurrir a todas las reuniones sin problemas de horario, el que tenía una vida política más activa dentro de la organización y accedía con más facilidad a los puestos de conducción -fuera ésta política o militar-. Su dedicación exclusiva le facilitaba una militancia activa que superaba ampliamente al compañero que debía cumplir un horario forzoso que lo mantenía alejado de la política durante muchas horas diarias.

La dependencia se manifestaba en cierta sumisión entre el profesionalizado y la línea política de su organización; para quien está supeditado a un sueldo que le otorga una dirección partidaria, plantear disidencias lleva implícito el riesgo de perder su condición de rentado y con ello a todo lo que tiene acceso: casa, en algunos casos automóvil, cargo alcanzado en el escalafón interno y prestigio, entre otras cosas.

Un dirigente medio que recibía una renta tenía mayores precauciones para disentir con la línea política de su grupo y sobre todo para llevar esa diferencia hasta sus últimas consecuencias, ya fuera la creación de una corriente interna o la escisión. El vínculo creado gracias al dinero influía considerablemente para que en muchos casos los profesionalizados fueran defensores de la "línea oficial" y formaran un sólido bloque junto a las direcciones cuando algún grupo interno cuestionaba posiciones políticas.

Los problemas se manifestaban, además, cuando había que efectivizar sanciones; si un rentado cometía un acto de indisciplina y era sancionado con la pérdida de su condición, se encontraba con la dificultad de no poder reintegrarse a lo que podríamos llamar "vida civil".

No es difícil imaginar las deformaciones que esto produjo; un joven que a los 18 años pasaba a la categoría de rentado tenía, al cabo de cuatro o cinco años en esa condición, un "blanco" en su vida que era muy difícil de llenar. Al cabo de ese lapso -en caso de que quisiera integrarse a una actividad productiva-, carecía de antecedentes laborales, no tenía experiencia en ninguna profesión, era un verdadero marginado que, inclusive, desconocía la cultura del trabajo con todo lo que ello implica: horarios, competencias, arbitrariedades de un jefe o un sueldo escaso.

El militante rentado tenía una condición privilegiada que con el tiempo se convertía en su *modus vivendi*, en un estilo de vida del que le resultaba difícil apartarse. Particularmente para aquellos que carecían de profesión o habían abandonado sus estudios universitarios; fueran oficinistas, empleados bancarios, empleados públicos y toda esa gama de trabajadores que tienen una relación laboral que se confunde entre la necesidad del sueldo y la muchas veces frustrante rutina personal. Una vez rentados, cuando de pronto descubrían que podían realizar una tarea política agradable, plena, con un buen margen de manejo de poder, con capacidad para producir hechos que tendrían repercusión pública, era difícil retornar al ya mencionado horario de trabajo, al cambiante carácter del patrón o jefe de personal o a la tediosa labor de una oficina pública. Ese militante creaba, entonces, diversos mecanismos para defender su estado -en realidad su sueldo y su libertad-, tal como lo defiende un asalariado que no quiere quedarse sin trabajo.

¿Cómo regresar a una oficina cuando la militancia ofrecía un ámbito que colmaba todas las aspiraciones? Semanalmente participaba de cuatro o cinco reuniones de discusión política colectiva; tenía, además, numerosas citas diarias en las cuales también hablaba de política con los compañeros, con los cuales programaba nuevas actividades, criticaba las ya realizadas, proponía nuevos métodos, en fin, se sentía integrado a una entidad que estaba contribuyendo a modificar a la sociedad. Si a ello le sumamos las legítimas aspiraciones a acceder a otros ámbitos de poder -jefe de grupo, miembro del comité político, jefe de zona, miembro del Comité Central-, se entenderá que una vez rentado ese militante realizara todos los esfuerzos por conservar su condición de tal. No era extraño, por lo tanto, que cuando se plantearan discrepancias ese guerrillero tuviera una natural inclinación a sostener las posiciones de la dirección de la organización, administradora al fin de cuentas de los fondos del grupo.

La consecuencia más grave que produjo la política de rentados fue el desarraigo inducido en jóvenes que prácticamente ingresaban a las organizaciones en esa condición. Fue en ellos donde se ocasionó el daño más severo, posiblemente por su escasa experiencia política, por la ingenuidad correspondiente a la adolescencia, la falta de otros patrones de conducta que le sirvieran para cotejar su práctica con la de otros. Un militante que pasaba a la categoría de rentado a los treinta años de edad, luego de haber trabajado o estudiado, luego de conocer la relación que existe entre el trabajo y su propio desarrollo individual, tenía más posibilidades de comprender que esa situación era excepcional y finalmente pasajera. Pero un adolescente recién egresado del colegio secundario, que nunca había trabajado y que se incorporaba como profesionalizado, recibiendo una renta mensual, disponiendo de todo su tiempo para citas, reuniones y viajes al interior del país, incorporaba esa situación como un hecho normal de su vida y trataba de no desprenderse nunca de su nuevo estatus. Era un revolucionario profesional, un guerrillero de tiempo completo dedicado cabalmente a la revolución. En su imaginario la figura del Che Guevara se proyectaba como modelo a imitar. Naturalmente trataría de conservar esa condición para siempre, sin advertir que en realidad estaba ingresando en una categoría cercana a la de un marginal.

Lo específico en este caso es que ya no había retorno sencillamente porque los guerrilleros rentados se convertían -por su condición de combatientes-, en marginales a quienes el propio orden del Estado les impedía -aunque quisieran hacerlo-, reintegrarse a la "vida civil". En ese punto coincidían ambas voluntades; el rentado prefería conservar su condición porque ello le garantizaba participar plenamente en la aventura revolucionaria. Y porque así podría tener acceso a nuevos puestos de conducción que le otorgarían mayores cuotas de poder. A su vez, el Estado a través de sus organismos de represión estaba a la caza de todos los guerrilleros; y si algún clandestino intentaba recuperar su "identidad civil" era detenido o asesinado.

El carácter secreto de la actividad armada y la ya mencionada reticencia a la crítica a la guerrilla, impide ofrecer datos concretos sobre las consecuencias de este fenómeno. Basta señalar que, ya en el exilio, fueron numerosos los casos de jóvenes que no lograron participar de la "vida civil", marcharon a otros países a ofrecerse como combatientes voluntarios o retornaron a pelear en una Argentina en donde sólo cabía esperar la muerte.

LA IDENTIFICACIÓN CON EL ENEMIGO

El triunfo de Juan Domingo Perón, en 1973, con el 62 por ciento de los votos, produjo la segunda fractura —y esta vez definitiva— entre guerrilla y sociedad. La primera había ocurrido el 25 de mayo de ese mismo año, cuando los ciudadanos acudieron masivamente a las urnas para elegir un gobierno civil y dejar atrás a la dictadura militar. Ignorando la voluntad popular que apostaba por la paz y la convivencia, todos los grupos armados continuaron con el ejercicio de la violencia. Si bien es cierto que Montoneros redujo su accionar militar, esa reducción fue relativa pues siguió operando sin firmar sus acciones. La insistencia en la vía armada tenía una lógica irreductible: si el objetivo final era la revolución socialista, la democracia burguesa era apenas una etapa que podía y debía ser aprovechada para pertrecharse, reincorporar a los combatientes que fueron liberados de las cárceles, difundir la prensa sin restricciones policiales, utilizar los resquicios que otorgaban las libertades del gobierno constitucional. Pero ningún grupo guerrillero creía en la democracia y en las instituciones. Si el socialismo revolucionario implicaba un cambio de sistema, la democracia burguesa debía ser utilizada como trampolín para esa transformación.

No es necesario detenerse a explicar que ese discurso fue rechazado por la sociedad. La simpatía que una buena porción de los ciudadanos había sentido por los jóvenes que luchaban contra la dictadura, se evaporó cuando esos mismos combatientes prosiguieron con sus acciones armadas contra un gobierno constitucional elegido por esa misma ciudadanía.

En realidad, la guerrilla argentina reprodujo un fenómeno conocido en el campo de la violencia política: una vez que se toman las armas es muy difícil abandonarlas porque el poder que ellas otorgan –sea real o imaginario- distorsiona la mirada política. Es difícil “retroceder” al campo del diálogo y de la negociación cuando el ruido de las armas impone su voz.

"Una política reformista es a veces aburrida -difícilmente puede ser una negociación sobre el mejoramiento de la seguridad social más emocionante que el asalto al Palacio de Invierno-, la alternativa puede muy bien resultar mortífera, homicida. El ceder ante el apetito de apocalipsis resbala con demasiada facilidad hacia el suicidio moral."

La ceguera de gran parte de la dirigencia guerrillera que eligió continuar con la violencia tuvo su contraparte con la decisión del gobierno constitucional de responder a esa violencia mediante la utilización de bandas armadas clandestinas que recurrieron al secuestro y asesinato de todo aquel que fuera sospechoso de estar vinculado a la izquierda o tener simpatías por ella.

Rápidamente se produjo entonces el enfrentamiento entre dos aparatos armados, con el consiguiente reflujo de la sociedad que razonablemente optó por apartarse de ese baño de sangre. Tiroteos callejeros, secuestros, cuerpos acribillados se convirtieron en episodios cotidianos que llegaron a crear un clima de terror que se prolongó hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Después de esa fecha, el terror tomó características y dimensiones diferentes.

La decisión de continuar con la lucha armada en contra de un gobierno constitucional, más la respuesta ilegal de ese gobierno, contribuyeron a acrecentar todavía más el espíritu militarista de los grupos guerrilleros. Si esa tendencia ya se había insinuado en sus orígenes, con el retraimiento de las bases sociales y el aislamiento al que quedaron expuestos los combatientes, se produjo un corte entre la realidad y la particular interpretación sobre esa realidad que elaboraron los grupos armados. Cada hecho, cada cambio político, era tan arbitrariamente interpretado por la guerrilla que, en su imaginario, se resignificaba una derrota en triunfo y un retroceso político en impulso revolucionario. Como monjes de clausura, los guerrilleros vivieron herméticamente encerrados en un mundo propio, teñido por el exitismo y el arrebatamiento de las armas.

Ejecuciones de dirigentes sindicales oficialistas, de militares, de empresarios y políticos configuraron un microclima de sangre y miedo. “La rebelión, desviada de sus orígenes y disfrazada cínicamente, oscila en todos los niveles entre el sacrificio y el asesinato. Su justicia, que ella esperaba que fuese distributiva, se ha hecho sumaria.”

Como un disparador que despierta los peores instintos, la guerrilla recurrió a la disciplina interna, a los grados militares, al orden cerrado, al uso del uniforme en reuniones, en una curiosa coincidencia identitaria con el enemigo al que pretendía combatir. Ejecuciones internas por el delito de traición, culto al coraje y culto a la muerte se convirtieron en hábitos que reflejaban, en verdad, la profunda descomposición moral y política de las direcciones de los grupos armados, transformados en una parodia de lo que habían pretendido ser en sus orígenes. En octubre de 1975 se elaboró en Montoneros el Código de Justicia Penal Revolucionario que, entre otras cosas, castigaba la infidelidad conyugal. Dispuesto en seis capítulos y 52 artículos, el texto es una suerte de réplica, en algunos casos mucho más severo, que los códigos de justicia militar. Está dirigido a “soldados y milicianos” y establece la pena de muerte para quienes cometan los delitos de “traición”, “delación” e “insubordinación”, entre otros. El artículo 9 castiga con la muerte el delito de “conspiración”, y su descripción es elocuente:

“Incurrir en este delito quienes al margen de las estructuras organizativas o dentro de las mismas realicen una actividad concreta orientada a lograr una división o un fraccionamiento de la organización”. En la práctica, podían ser alcanzados por la pena máxima quienes disintieran con la política oficial de la organización.

La semejanza con los militares que se pretendía combatir se agudizó a medida que se tornaba más evidente el retroceso político de los grupos.

Un ejemplo de esta situación se produjo cuando Argentina y Chile se encontraban a punto de iniciar hostilidades por el conflicto del Beagle. En esa ocasión Montoneros publicó un documento titulado Posición Montonera frente al Conflicto del Canal de Beagle. Allí se impartieron las siguientes directivas “para la acción inmediata a todos los militantes del Movimiento Peronista Montonero y del Partido Montonero:

” [...] Entablar conversaciones con diversos sectores de la oficialidad de las Fuerzas Armadas para evitar la ruina de la Nación...

” [...] Intensificar las relaciones con los oficiales de las Fuerzas Armadas para poner fin a la guerra exterior y garantizar la pacificación nacional.

” Para los combatientes del Ejército Montonero:

” [...] Resistir militarmente contra cualquier fuerza extranjera que invada el territorio argentino en cualquiera de sus puntos.

” [...] Suspender los hostigamientos armados a las dependencias militares y al personal de las Fuerzas Armadas con la lógica excepción de los combates defensivos.”

La carta estaba firmada por el “Comandante Mario Eduardo Firmenich, primer secretario del Partido Montonero, Comandante en Jefe del Ejército Montonero”.

La propuesta de entablar conversaciones de igual a igual con los militares de la dictadura revelaba la pretensión de ser reconocido como un ejército paralelo y, llegado el caso, combatir junto con aquellos en defensa de una presunta soberanía avasallada. Esta carta fue publicada en octubre de 1978, cuando día tras día se secuestraba, se torturaba y desde aviones se arrojaban al mar a prisioneros vivos. Pero omitiendo el despropósito de unirse con los autores de estos crímenes para defender las fronteras, es interesante comprobar que desde el lenguaje utilizado para la propuesta, hasta la elección del cargo –Comandante en Jefe del Ejército Montonero- la identidad rigurosamente militar adoptada había campeado en las filas guerrilleras.

El 4 de septiembre de 1976, en plena dictadura, un “oficial del Ejército Montonero” firmó una carta dirigida al general del Ejército Carlos Alberto Salas en la que, luego de algunas consideraciones políticas, expresó que “es seguro que existen, entre Usted y nosotros, distintas apreciaciones, sobre éstos y sobre otros asuntos. Pero es un deber de hidalguía militar reconocer en sus palabras [...] una buena fe, una limpieza de propósitos dignos de encomio. Los hombres como Usted siempre tienen un lugar disponible a nuestro lado, en este nuevo Ejército que estamos creando” (cursivas del autor).

La creación del cargo de “capellán militar” dentro de la organización de Montoneros solo agrega un dato más a la confusión de identidades instalada en una buena porción de la militancia.

EL FINAL

¿Realmente creímos que podríamos trastocar la historia? Sin duda alguna. Fueron épocas de certezas y sentimientos intensos, de convicciones profundas. Pero abrir las puertas de la vio-

lencia condujo a tal desmesura que el viejo y noble discurso de la igualdad se convirtió en el discurso que justificaba el homicidio.

Fuimos empujados por presuntuosas minorías que en sucesivos golpes de estado educaron a varias generaciones en la lógica de que al poder se accede por la fuerza. Militares y civiles integristas nos incitaron -con su violencia-, a creer en las armas más que en las palabras.

Pero no debemos engañarnos. Si ellos fueron el detonante, nosotros fuimos los actores. Eramos conscientemente antidemocráticos porque teníamos certezas absolutas, indiscutibles, que particularmente el leninismo nos había legado. La ultraderecha nos proporcionó la excusa, nos facilitó el campo, nos regaló la carnada que nosotros estábamos dispuestos a morder. En 1966 el dictador Juan Carlos Onganía apretó el botón que prendía la luz verde. Nosotros estábamos esperando ansiosos que lo hiciera.

Y una vez que nos sumergimos en esa fantástica aventura en donde el dolor y el placer se derrochaban generosamente, no fue fácil desprenderse, porque la vida en la acción puede ser verdaderamente prodigiosa. Pero esencialmente inmoral. No sólo por la primitiva noción del sacrificio en el altar de una ideología absoluta, sino también por la inhumana convicción de que es sobre el cadáver del enemigo que se edifica la justicia.

No hay paz que pueda alcanzarse sobre un costo tan elevado. Porque siempre quedará un herido que clamará venganza y no aceptará las nuevas reglas impuestas por los vencedores. Y porque los vencedores, después de todo, serán devorados irremisiblemente por la exaltación religiosa de la secta que cree haber llegado al final de la historia.

Quienes fuimos adolescentes y también adultos durante la década del sesenta nos educamos en la lógica de los grandes relatos. No podíamos sacrificar nuestro tiempo por un aumento de salarios que -finalmente-, solo demostraría que el sistema apela a recursos que desvían la atención de los verdaderos intereses históricos. Si los hombres todavía no habían entendido que debían ser libres, nosotros estábamos precisamente para demostrarlo; confundidos por las artimañas de un sistema lo suficientemente hábil como para desorientarlos de sus sublimes objetivos, esos trabajadores necesitaban -aún sin saberlo-, del factor subjetivo, del partido único depositario de la estrategia revolucionaria que los conduciría hacia su liberación definitiva, hacia el fin de sus padecimientos.

Las masas debían ser guiadas hacia el futuro aún cuando en el presente no comprendiesen el verdadero destino que les tocaba protagonizar. Algunos eran peronistas y otros leninistas. Al

fin y al cabo, todos compañeros que se encontrarían en la misma trinchera, codo con codo, hombro con hombro.

Embarcados en una actividad febril, excitante, caímos rápidamente en la degradación de las propuestas iniciales. El mundo de los sueños se transformó en el mundo de la muerte, en el oscuro universo en el que la audacia, el desprecio por la vida y la satisfacción por la muerte fueron valores que suprimieron el valor de la razón. Nuestra moral, la que exaltaba la libertad del proletariado, la moral de la realización plena del ser humano, la moral del hombre redimido, perfecto, definitivamente feliz, se convirtió -en algunos casos- en la "moral de la pandilla" sobre la que ya había alertado un Camús demasiado temprano para nosotros.

La visión apocalíptica de la historia siempre es excitante para la imaginación. El gran objetivo estaba justificado por la teoría revolucionaria y también por un presente que los golpes, la prepotencia y la brutalidad de las Fuerzas Armadas nos ofrecían en bandeja. Si los obreros no parecían muy entusiasmados en hacer la Revolución era porque el despertar de los hombres no depende de sí mismos. Ahí estaba nuestra generación politizada para cumplir con el papel asignado por la historia. Con osadía y tenacidad era posible construir el mañana definitivo.

Sin duda creímos en todo eso y actuamos con una intensidad ciega. Un febril activismo caracterizó nuestras horas y una convicción de totalidad nuestro pensamiento.

En marzo de 1976 la guerrilla había llegado a su fin. Jamás podría haber alcanzado el poder; estaba demasiado deteriorada políticamente como para terminar exitosamente su carrera.

Poco quedaba ya de sus sueños iniciales. Caricatura de ejércitos convencionales, creaba -a falta de esperanza-, himnos militares, uniformes, dictaba bandos y organizaba desfiles.

En 1976 la guerrilla había terminado; podía hacer estallar explosivos, podía realizar atentados personales, pero su estructura ya estaba fracturada por el desaliento de la mayoría y por direcciones que debían recurrir a la rígida disciplina para mantenerse en sus puestos. El proyecto había fracasado irremisiblemente.

No es cierto que las Fuerzas Armadas hayan vencido a la guerrilla. La represión aceleró el camino hacia la muerte, pero no hubo una derrota militar a cargo de los militares; ellos solo recogieron los restos de grupos que se habían suicidado con sus propios excesos. Los militares

golpistas lo saben muy bien: a sus campos de tortura ingresaban jóvenes profundamente desalentados, escépticos, ya vencidos.

Trágico final de una épica impura para quienes habíamos imaginado un mundo libre y transparente

Revista Lucha Armada, Año 3 - Número 8 – 2007
www.luchaarmada.com.ar